



VIEJAS Y NUEVAS RURALIDADES A PARTIR DE LAS MIGRACIONES INTERNAS; ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA REALIDAD COLOMBIANA

Flor Edilma OSORIO PEREZ¹

Las migraciones constituyen un factor fundamental en la conformación y transformación de las sociedades. Su importancia va más allá de la movilidad física de personas y grupos, la cual es ya por sí misma importante en la distribución y localización de las sociedades. Las migraciones implican, sobretodo, la creación y re-creación de las relaciones sociales, con lo cual se genera un cambio permanente en las múltiples dimensiones de la vida. A manera de puentes y con diversos ritmos, la movilidad mezcla, superpone y rompe historias, costumbres y cosmovisiones, y va generando nuevos procesos de conflicto, cooperación y competencia entre los grupos sociales.

Este texto pone en evidencia nuevas ruralidades que surgen de la movilidad interna, dentro de los contextos socio- económicos y políticos que vive Colombia en este cambio de siglo. Para este efecto, se plantean inicialmente algunas tendencias del contexto nacional en la última década, para luego caracterizar dos nuevas dinámicas rurales que surgen con la migración, analizando comparativamente sus dinámicas.

1. Algunas características del contexto colombiano desde las sociedades rurales.

El cambio de siglo, encuentra a la sociedad colombiana en una fuerte crisis de carácter complejo. Retomo la comprensión de crisis propuesto por Morin, para quien la crisis surge con la perturbación que se produce cuando un sistema se enfrenta con un problema que no puede resolver según las reglas y normas de su funcionamiento y existencia normales. La crisis implica un crecimiento de las incertidumbres y un efecto de bloqueo en los dispositivos de reorganización. Pero al mismo tiempo, este bloqueo suscita el desbloqueo de las capacidades o realidades inhibidas con profundas raíces históricas (Morin, 1995). Sin pretender reducir tal complejidad, me concentraré en esbozar rápidamente cuatro situaciones que, formando parte del contexto nacional, tienen expresiones e impactos concretos y significativos en sociedades y territorios rurales.

1.1. La crisis del sector agropecuario y rural.

Siete de cada 10 pobladores rurales están por debajo de la línea de pobreza, es decir que no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, proporción similar a la registrada hace dos décadas (Gómez y Duque, 1998). Diversas son las causas que se articulan para que esta situación persista y sobretodo, para que la brecha rural – urbana siga manteniéndose en un nivel importante.

Uno de los factores significativos en la crisis agrícola tiene que ver con las medidas macroeconómicas que se impusieron con

¹ Profesora e Investigadora. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Universidad Javeriana. Bogotá.

fuerza al comienzo de la década del 90, en términos de apertura económica y ajuste estructural, y que han tenido impactos diversos según los propios circuitos de cada producto. Sin embargo, el balance general es bastante negativo, la estructura productiva del país no se modernizó y el sector alimentario pasó a depender más de las importaciones. Veamos algunos de las manifestaciones de esta crisis:

- Se aumentaron significativamente las importaciones de productos agropecuarios de manera que en cinco años de cuadruplicó el valor de las importaciones, que pasó de 378.6 millones de dólares en 1991 a 1852.9 millones en 1996 (Balcázar y Orozco, 1998). Se calcula que en la década del 90 se pasó de un millón de toneladas de importaciones de productos agropecuarios en 1991, a cinco millones de toneladas en 1999 (Ossa, 2000).

Se redujo en 450.000 hectáreas el área de superficie cultivada (Balcázar y Orozco, 1998).

Se produjo una disminución importante en el empleo rural al pasar de 3,31 millones de personas ocupadas en actividades agropecuarias en 1991 a 3,05 millones en 1996. La tasa de desempleo rural pasó de 4.2 % en noviembre de 1991 a 6.4% en Septiembre de 1996 (Balcázar y Orozco, 1998) y al 10.9% en 1999 (Ossa, 2000).

Se redujeron los precios al productor de algunos productos agropecuarios especialmente algunos importables como cereales y oleaginosas².

Si bien la apertura disminuyó la rentabilidad en la agricultura de manera diferenciada, coincidió con otras crisis de tipo económico en el ámbito nacional e internacional: la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas, la revaluación, el rompimiento del pacto del café y el descenso de sus precios, las altas tasas de interés y las dificultades de la Caja Agraria³. A ello debe incorporarse el contexto de la débil gobernabilidad, ausencia del Estado en vastas zonas del país, el conflicto social y político interno, un modelo de crecimiento imitativo y sin desarrollo y una democracia incompleta, corrupta y débil que hace difícil la convivencia (Machado, 1998).

1.2. El narcotráfico y el incremento de cultivos de uso ilícito.

Por lo menos 259 municipios del país tienen cultivos de coca, amapola o marihuana en su territorio, esto es la cuarta parte de los municipios del país. De estos, 224 municipios (el 90%) corresponden a zonas de colonización (Fajardo y Mondragón, 1997). Oficialmente se estima que una 77.000 Ha. están sembradas en coca y otras 25.000 en amapola, aunque antinarcóticos asegura que ya no quedan sino 6.000 Ha. de amapola. Sin embargo el área sembrada de coca puede ser mucho mayor que la estimada de acuerdo con comprobaciones empíricas. Se cree que entre 30.000 y 60.000 familias están directamente involucradas en estos cultivos y cerca de 200.000 de manera indirecta. Los cálculos económicos de la actividad del narcotráfico son diversos, pero se estima entre 2.000 y 4.000 millones de dólares por año⁴.

La producción de cultivos de uso ilícito involucra una importante población de carácter rural, que se ubica como el primer y más débil eslabón de una cadena de comercialización de gran importancia económica, a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la Misión Rural, la sustitución de los cultivos ilícitos tiene diversos obstáculos que tienen que ver con las ventajas comparativas que estos tienen frente a la crisis de los demás productos agrícolas, las implicaciones ambientales de la región amazónica, los costos de programas de sustitución y la necesidad de acuerdos comerciales internacionales e internos para que se garantice la compra a precios rentables de la producción con que se sustituirán los cultivos ilícitos.

Sin embargo, el análisis del problema y la implementación de soluciones han superado el marco de

2 El bajo precio de cereales y oleaginosas favorece especialmente a la industria. Es decir, el caso de un menor precio en la cebada a quien más favorece es a las productoras de cervezas. Lo cual no significa que los consumidores de cerveza hayan salido ganando y, sobre todo, la canasta familiar de los empleados, los obreros y los más pobres no se vio necesariamente favorecida.

3 Organismo estatal encargado del crédito agropecuario, particularmente a los pequeños productores.

4 Ver cálculos realizados por Kalmanovitz (1995) y Steiner (1996), entre 1987 y 1995

Colombia, vinculando aún más la intervención del gobierno de los Estados Unidos en el país, al considerar el narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Así se ha optado por la vía de la represión de los productores, como la causa fundamental, para lo cual se han venido implementando fumigaciones en los cultivos de amapola y coca, que no sólo han contribuido a dispersar los cultivos, sino también a extender su área de influencia. Se calcula que entre 1984 y 1995 a pesar de los programas de erradicación, se ha generado un aumento del 383% en la superficie cultivada de ilícitos, en tanto que se ha destruido un millón de hectáreas de bosque primario para su siembra. (Ferro, Osorio, Uribe y Castillo, 1999)

El Plan Colombia⁵ en su estrategia de antonarcóticos tiene como meta reducir el 50% del cultivo, procesamiento y distribución de la droga. La intensificación de las fumigaciones en los departamentos de Putumayo y Caquetá combinan la fumigación de cultivos con la lucha antiguerrillera, en tanto que los cultivos existentes en la zona norte de control paramilitar no están siendo tenidos en cuenta como parte de la estrategia antinarcóticos. El importante apoyo económico que el gobierno estadounidense dio al plan (1300 millones de dólares), y que se orienta en buena parte en el orden militar, será una contribución a la intensificación de la guerra, sin que haya una política de largo alcance frente a las alternativas que se ofrecerán a los miles de cultivadores de coca y amapola.

- La intensificación de la guerra

“La guerra generalizada entre ejército, guerrilla y paramilitares en Colombia, se desarrolla en medio de complejos y peculiares procesos de poblamiento y repoblamiento del campo colombiano, de la expansión de actividades productivas marginales e ilícitas pero inscritas en la lógica del mercado mundial con una amplia demanda, así como la ampliación de la pobreza en zonas en donde abundan los recursos y circula el capital. A esto se agrega la incidencia de la crisis política en el conflicto armado y el entorno propio que crea una guerra irregular y su derivado inmediato: la guerra sucia”. (Restrepo, 1999)

La intensificación y expansión de la guerra en el país, es una dinámica evidente. Se constata, por ejemplo, desde 1985 una expansión de la actividad guerrillera en zonas cafeteras de minifundio, de latifundio ganadero de la Costa Caribe, de agricultura empresarial donde existe gran población rural, en zonas de minifundio deprimido, así como en las áreas rurales cercanas a las grandes ciudades. En las zonas de colonización en donde ha tenido una presencia fuerte, la expansión ha continuado de manera más lenta. (Echandía, citado por González, 2000). La expansión paramilitar obedece a su objetivo de “liberar” territorios, ante los pobres resultados del ejército colombiano. Numerosos organismos de derechos humanos han denunciado las alianzas explícitas y tácitas entre estos dos ejércitos (el estatal y las autodefensas) para desalojar las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

La guerra en Colombia tiene diferentes lecturas y explicaciones que han ocupado a muchos estudiosos del tema. Más allá de lo meramente militar como su expresión evidente, es necesario mirar el trasfondo de las estructuras políticas, sociales y económicas que han ido forjando y alimentando conflictos no resueltos, de diversa índole, que a la fecha mantienen a la sociedad colombiana en medio de una guerra no declarada. Problemas estructurales como un modelo económico y político excluyente, la tendencia a modernizar sin democratizar, la impunidad y la crisis de justicia constituyen pilares sobre los cuales se ha ido configurando el cuadro del conflicto armado (Vargas, 1999). Así mismo, es necesario tener en cuenta los diferentes actores que intervienen en el conflicto armado y que van más allá de los armados. Grupos económicos,

⁵ Plan presentado por el presidente Andrés Pastrana al gobierno de los Estados Unidos. Octubre de 1999.

dirigentes y población en general van asumiendo paulatinamente, por la fuerza, por opción o por reacción, alianzas tácitas y expresas con los grupos armados, con lo cual se puede estar corriendo el riesgo de interiorizar aún más la dinámica de la guerra. Pese a los procesos que están en marcha para facilitar el diálogo con los actores armados, particularmente de las guerrillas con el Estado y con algunos sectores de la sociedad colombiana, el proceso de la guerra continúa incrementándose y degradándose, y afectando de diversas maneras a la sociedad en su conjunto.

- La estructura concentrada en la propiedad y acceso a la tierra.

Colombia se caracteriza por una estructura de concentración de la propiedad rural, que se ha construido históricamente desde la conquista y la colonia. Los estudios realizados en 1993 registraron que el 82% de los predios registrados en el IGAC eran minifundios⁶ y cubrían apenas el 16% del área predial rural (Machado, 1998). Se calcula que cerca de 300.000 familias campesinas carecen de tierra y un millón requieren más o mejor tierra (Valderrama y Mondragón, 1998). Es evidente el proceso de contrarreforma agraria en torno a los megaproyectos y en relación con las explotaciones mineras y petroleras. De esta manera, los conflictos por la tierra no se limitan a la vieja pelea entre terratenientes y campesinos e indígenas, sino que incluye intereses estratégicos por el acceso a recursos naturales, incluidos los genéticos y el acceso a grandes vías, que implican una valorización inmensa de los predios (Valderrama y Mondragón, 1998). Ello ha estado de la mano de la violencia, el desplazamiento de pobladores rurales y las masacres de los grupos paramilitares.

La estructura de propiedad y tenencia de la tierra ha estado muy marcada por el conflicto armado. Así se ha ido generando un proceso de “ganaderización” en departamentos como Cesar, Santander, Meta, Antioquia, Valle, Córdoba y Magdalena, por parte de narcotraficantes y empresario mineros. Según Alejandro Reyes, los narcotraficantes habían comprado en 1995 propiedades en 409 municipios, sin que se pudiera cuantificar la superficie comprada⁷. El mismo autor señala que esta influencia ha acentuado la concentración de la propiedad, sobrevalorado el precio de las tierras y agudizado el uso ineficiente de las mejores tierras para la ganadería. Así mismo, ha contribuido a financiar las estrategias privadas de contrainsurgencia, en muchos casos, aterrorizando la población rural y aumentando los niveles de violencia y con frecuencia han deteriorado el escaso liderazgo social en las regiones.

La estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia genera grandes conflictos sociales: dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños y medianos propietarios, poca generación de empleo en la ganadería extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación predial por el poder político de los propietarios en los municipios, y poca capacidad de éstos para tener recursos propios que les permitan invertir y promover el desarrollo rural (Machado, 1998)

La crisis del sector agropecuario y rural, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la intensificación de la guerra y la concentración en la propiedad de la tierra constituyen cuatro factores que se gestan y alimentan en territorios rurales, y que se dinamizan y retroalimentan generando a su vez nuevos problemas de orden nacional. La profundidad y carácter estructural del problema rural en Colombia “consiste en un modelo de desarrollo excluyente y poco autónomo que se sustenta en un Estado débil política e institucionalmente, que

6 El estudio identificó como minifundio todos los predios menores o iguales a una Unidad Agrícola Familiar, UAF. Esta es definida como una unidad suficiente para suministrarle a la familia que la explote lo equivalente a dos salarios mínimos legales. Se calcula según la identidad sociocultural, las condiciones agroecológicas y de mercado y la disponibilidad de servicios de apoyo a la producción y de infraestructura física y social, por lo cual existe una alta variación en hectáreas (Minagricultura, 1992).

7 Citado por González, 2000.

le impide definir al sector rural como estratégico para un desarrollo sostenible, con unas reglas de juego y políticas de largo alcance que faciliten el desarrollo de los mercados, de la competitividad y de la sociedad rural, en condiciones equitativas e incluyentes”. (Machado, 1998)

2. Dinámicas migratorias internas recientes en Colombia.

El estudio de las migraciones internas tuvo un tiempo de auge de estudio en la década del 60 y del 70 en Colombia⁸, y en América Latina⁹, época que correspondió a la mayor visibilidad del fenómeno de migración económica rural – urbana. Sin embargo, este interés disminuyó en las décadas del 80 y 90; actualmente parece estar recobrando vigencia su estudio y comprensión.

En la historia reciente del país la migración rural-urbana alcanzó su mayor promedio anual entre 1951 y 1964, con el 2.3%, tiempo en el cual se provocó la mayor tasa de urbanización. Mientras en ese período la transferencia neta de las localidades rurales contribuyó con el 37% del crecimiento de la población urbana, entre 1973 y 1985 su aporte bajó al 30%. La misma autora sostiene que si bien esta transferencia rural – urbana continúa, ha disminuido su importancia, para dar lugar a una redistribución de población entre regiones. Igualmente, otras formas de movilidad distintas a la residencia definitiva, han cobrado importancia, como las migraciones circulares y pendulares (Flórez, 2000).

En el caso colombiano encontramos diversos tipos de movilidad de la población dentro del mismo territorio, los cuales han sido abordados con diversa intensidad, algunos manteniéndose casi ignorados a nivel de una investigación sistemática. Una identificación provisional de estas migraciones internas, en tanto “movimientos que cambian definitivamente el espacio de vida con cambio de residencia”¹⁰ (Picouet, 1992), según el motivo que las provoca, es la siguiente:

8 Ver por ejemplo los diversos estudios de Ramiro Cardona, como Destino la metrópoli (1977), Las migraciones internas (1972), Distribución espacial de la población (1976)

9 Ver, por ejemplo Muñoz y Oliveira, Singer, Germani, entre otros.

10 Siguiendo a este autor, podríamos decir que son movimientos que se caracterizan por ser flujos irreversibles o de flujos reversibles de larga duración.

- Por razones de empleo y mejoramiento de condiciones de vida: en dirección tradicional campo-ciudad, sigue produciéndose de manera constante.¹¹
- Por actividades económicas de enclave, como la explotación petrolera¹².
- Por los desastres mal llamados “naturales” como las inundaciones, los terremotos y temblores¹³.
- Por efecto de obras de infraestructura¹⁴.
- Por protección ambiental¹⁵.
- Por procesos de colonización interna¹⁶.
- Por asignación de tierras a campesinos, en procesos promovidos por el INCORA.
- Por la guerra, identificada como “desplazamiento forzado”¹⁷.
- Por la expansión de los cultivos de uso ilícito¹⁸.

En este panorama de migraciones internas encontramos motivos y grados de coerción y voluntariedad diversos, así como diferentes posibilidades de planeación y control de tales movimientos de población y de su posteriores reasentamientos. Igualmente amerita identificar el carácter más o menos selectivo de los grupos sociales que migran, pues ello va a derivar procesos distintos en cuanto a recursos disponibles, valoración y manejo de riesgos y posibilidades de quienes migran. Este último aspecto es también un referente que marca la valoración de la migración como un problema social: es la migración de grupos empobrecidos la que produce conflicto y desorden en el sitio de llegada, y son estos grupos sobre los cuales recaen con frecuencia los riesgos de empobrecimiento de la migración forzada¹⁹.

De esta diversidad de procesos migratorios que están presentes en la realidad colombiana y que comprometen los espacios y sociedades rurales, voy a referirme a dos dinámicas: el desplazamiento forzado por la guerra y la migración que se produce por los cultivos de uso ilícito. Estas dos dinámicas tienen en común su carácter no planeado y su articulación con dos problemas

11 Así lo evidencia el crecimiento de los cinturones de miseria de las ciudades grandes: Aguablanca en Cali, Ciudad Bolívar y Usme en Bogotá. Se registra igualmente la variación de esta dinámica, por una parte, hacia el desarrollo de la periferia de las metrópolis, y por la otra, sido su orientación hacia ciudades intermedias. Ver, por ejemplo, DUREAU Françoise y Carmen Elisa FLOREZ en *Dinámicas demográficas colombianas: de lo nacional a lo local*. 1996.

12 Ver “El sueño petrolero. Movilidad espacial y dinámicas urbanas en Yopal, Aguazul y Tauramena” DUREAU, Françoise y Carmen Elisa FLOREZ. Más recientemente está el conflicto entre los indígenas U’wa y la explotación petrolera en el norte de Boyacá y Arauca.

13 Ver, por ejemplo, Desastres. SAAVEDRA Rosario. Identidad a través del desastre, Dos comunidades nasas en el proceso de reconstrucción de WANG, Tone 1998

14 Ver, por ejemplo las ponencias de Helena CORREA y Margarita ILLERA en el X Congreso Mundial de Sociología Rural, sobre procesos de reasentamiento por obras de infraestructura. Julio 3ª, Agosto 5 del 2000.

15 El seminario internacional “Reasentamientos poblacionales y productivos” recogió algunas experiencias y discusiones sobre este tipo de migraciones, al igual que las dos anteriores. Universidad de los Andes, 28 a 30 de Abril de 1998.

16 MONDRAGON (2000) propone una tipología de migraciones, en donde ubica la colonización tanto de campesinos, como de latifundistas y de la economía empresarial agroindustrial.

17 Concepto retomado del ya establecido sobre el refugio, categoría empleada para migraciones internacionales por conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alterar drásticamente el orden público. Sobre este fenómeno consultar entre otros: Un país que huye, CODHES y UNICEF, 2000

18 Por ejemplo, FERRO, URIBE, OSORIO, CASTILLO, 1999.

19 Tal es el caso del patrón de riesgos, construido por CERNEA (1997) desde el Banco Mundial y que incluye ocho aspectos que producen empobrecimiento: las pérdidas de la tierra, el empleo, el hogar, intensificación del proceso de marginalización, aumento de la enfermedad y la mortalidad, la inseguridad alimentaria, la pérdida de las propiedades comunes y la desarticulación social. Este modelo tiene su aplicación concreta en términos de las compensaciones que gobiernos y/o empresas deben ofrecer a las poblaciones desplazadas cuando se trata de obras de infraestructura.

medulares del país. Sin constituirse en movimientos generalizados en el orden nacional, estos flujos migratorios constituyen procesos con importantes implicaciones desde una perspectiva local y regional.

El análisis de estos dos casos de migraciones internas lo desarrollaré conjugando de manera simultánea cuatro dimensiones claves y mutuamente articuladas, que se modifican con la movilidad. La dimensión más obvia que se modifica es el cambio de la territorialidad, en tanto configuración física y social del espacio. Con esta, se confrontan también los referentes y las representaciones sobre la identidad, que en las interacciones con otros grupos sociales, va a interpelar los referentes sobre sí mismo y sobre los otros. Nuevas necesidades, realidades y relaciones convergen en acciones colectivas de diferente orden, dentro del proceso de complementar o recomponer el patrimonio social, es decir, sus recursos materiales y no materiales necesarios para vivir en la nueva situación. Sin que se den de manera causal y ordenada, estas cuatro dimensiones van a estar presentes en una dialéctica que va a ir conformando sociedades diferentes, alimentadas por el patrimonio social que portan los migrantes que se mezcla con el patrimonio existente en los grupos de residentes.

2.1. Los desplazamientos forzados de población rural por la guerra²⁰

La presencia de conflictos armados en la historia colombiana reciente los ubica como una de las fuerzas que han provocado estas dinámicas migratorias, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Si bien se le ha asignado un mayor peso a las ventajas comparativas sociales y económicas entre el campo y la ciudad en los flujos migratorios nacionales, desde estudios de corte regional, los desplazamientos forzados por la violencia alcanzan fuertes implicaciones de reordenamiento de la población. Se calcula, por ejemplo, que la violencia bipartidista de la década del 50 produjo alrededor de 400.000 familias campesinas desplazadas²¹. La Violencia “provoca una migración forzada hacia las cabeceras municipales, que se convierten muy a menudo en una escala de la migración hacia las grandes metrópolis urbanas” (Pécaut, 1987). Con la violencia de ese momento se produjo también una modificación en la estructura de tenencia de la tierra, caracterizada por la compra de tierras por debajo del precio corriente a oferentes necesitados y la desposesión de pequeños propietarios y su posible transición a otro grupo social (Ortiz, 1985)

El desplazamiento forzado de población rural en la violencia de la década del 90 mantiene estas mismas características y patrones. El reconocimiento de este fenómeno por parte del gobierno sólo se hace en 1996, en concordancia con las presiones internacionales y con la atención que se empieza por parte de los organismos internacionales de derechos humanos que asumen el desplazamiento forzado como “una de las principales preocupaciones humanitarias de la comunidad internacional” (HCR, 1997)²².

Se calcula que en los últimos 15 años, en Colombia se han registrado cerca de dos millones de desplazamientos forzados, fundamentalmente de población rural. Una de las características del fenómeno ha sido su *claro sesgo rural*. Los hogares rurales²³ constituyen una proporción muy importante de la población desplazada, aunque no es la única. Buena parte de los municipios que expulsan población, son de carácter rural. Así mismo, grupos indígenas²⁴ y afrocolombianos residentes en zonas rurales, han sufrido de manera repetida el desplazamiento. La cosmovisión particular, basada en una relación ancestral con la tierra y una fuerte vivencia de organización comunitaria fundamentada en la identidad étnica, impactan de manera

20 El análisis de éste fenómeno se hace a partir de diversos estudios y experiencias de trabajo de la autora.

21 LEMOIN, Carlos citado por Mariano ARANGO en *El café en Colombia 1930-1958* (1982)

22 Se calcula que en el mundo hay cerca de 25 millones las personas que no han salido de la frontera de su país, pero que por conflictos violentos, violaciones manifiestas de derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, han tenido que abandonar su lugar habitual de vivienda y trabajo. De ellos, solo 5 millones están teniendo algún tipo de atención por parte de ACNUR.

23 Se han denominado hogares con vínculo rural, aquellos que tenían, antes del desplazamiento, por lo menos una de las siguientes características: habitaban en el campo (veredas), tenían acceso a la tierra bajo cualquier modalidad o uno de sus miembros trabajaba en actividades agropecuarias como propietarios o asalariado (Osorio y Lozano, 1996).

24 En 1998 se calculaba que 3026 indígenas se encontraban desplazados. Esta dinámica ha continuado, especialmente en Antioquia, pese a la declaratoria de neutralidad que la Organización Indígena de Antioquia, OIA, ha planteado públicamente.

particular estos grupos sociales.

Evolución del desplazamiento en Colombia, 1995-1999.

Año	Personas desplazadas Anualmente	Hogares desplazados anualmente	Cálculo N°Hogares despl. Diariamente	% de hogares rurales
1995	89.000	21.312	58	67.8%
1996	181.000	36.202	99	60.3%
1997	257.000	57.000	156	69.0%
1998	308.000	71.613	196	
1999	288.127	57.625	158	

Fuente: Datos de CODHES, Sistema de Información de Hogares Desplazados, SISDES. 1995 a 1999.

El desplazamiento forzado está generando importantes procesos de ruptura socio-cultural, económica y política en el seno de muchas sociedades rurales y, simultáneamente, impactando los espacios urbanos, no solo de las grandes ciudades sino también de ciudades intermedias y pequeñas. La mayor parte de la población desplazada sale de sus lugares de residencia y trabajo de manera individual y familiar, con lo cual se rompen abruptamente las redes sociales fraguadas tras largos años de convivencia y de acciones para dar respuesta a sus necesidades colectivas. El desplazamiento forzado está actuando como un puente impuesto entre el campo y la ciudad, produciendo el incremento de los cinturones de miseria en las ciudades, provocando procesos de exclusión y segregación urbana que refuerzan los ya existentes, y generando con frecuencia competencia por los recursos escasos con la población empobrecida, que no ha encontrado respuestas institucionales a sus necesidades. En medio de la desprotección del campo que es tomado por los grupos armados como estrategia de control y dominio de los territorios en disputa, la ciudad se percibe como un espacio social de mayor seguridad y de posibilidad de anonimato. Ello no significa que quienes tengan que desplazarse estén comprometidos ideológicamente con los grupos armados sino que, precisamente, es en el campo donde se da la presión y la exigencia para que se comprometan y en donde se es más vulnerable, por acción u omisión, a las alineaciones que hacen armados y no armados.

El proceso de desplazamiento se da de diferentes maneras:

- El abandono individual y/o familiar irreversible de su territorio para buscar ya sea de manera aislada o colectiva sus propias soluciones en otro lugar del país.
- La salida organizada de su territorio para ubicarse temporalmente en un casco urbano, exigiendo el retorno y el respeto para su autonomía y neutralidad frente a la guerra.
- En muy pocos casos, se logra la reubicación en otras zonas rurales del país con apoyo del Estado y de organizaciones no gubernamentales.
- El abandono temporal con retornos laborales, que fragmentan la tradicional articulación entre los espacios de producción y reproducción rural, pero que permiten protegerse y a la vez alimentarse.

- La itinerancia permanente en busca de un espacio social que les permita recomenzar su vida.
- En algunos casos, poco mencionados y estudiados, impone la sedentarización forzada²⁵ de población.

“Ser desplazado”²⁶ se constituye en un referente identitario importante en su nueva realidad, que se superpone con otros referentes como el ser campesino o proceder de una u otra región. Este referente tiene sin embargo una fuerte contradicción, pues es fuente de estigmas y exclusiones y, al mismo tiempo, recurso para demandar ayuda institucional. Conjuguar estas dos posibilidades lleva entonces a usarlo de manera discrecional y pragmático²⁷, al tiempo que los “pobres históricos”, que no son estrictamente desplazados por la guerra, ven en esa categoría identitaria una posibilidad para acceder a algún recurso. Ello ha estado produciendo fuertes conflictos entre los grupos de desplazados, entre estos y las instituciones, y al interior de las mismas instituciones, en la medida en que mucha de la energía se le apuesta al proceso de reconocimiento de la calidad de desplazado, que se traduce en “el ingreso al sistema” o “la salida del sistema”²⁸, hecho que no se traduce necesariamente en el acceso real a los servicios y recursos.

La dificultad de acceso a las respuestas a las necesidades básicas de la población en desplazamiento ha estado generando acciones colectivas de distinto orden, las cuales han aparecido de manera tardía con respecto a la presencia del fenómeno. Sólo a partir de 1997 empiezan a surgir algunas agrupaciones. 1998 fue especialmente prolífico en acciones de presión por parte de los desplazados. Sólo en Bogotá, se registraron 12 “tomas” de oficinas gubernamentales y sitios públicos por parte de organizaciones de desplazados, con una duración que fluctuó entre un día y tres meses, como una estrategia para presionar por soluciones rápidas. En Barrancabermeja 10.000 campesinos estuvieron durante 45 días (Grupo de Apoyo a Desplazados, 1998). Este tipo de acciones se da particularmente en las grandes ciudades por dos razones fundamentales: pueden tener un poco más de protección y es allí donde residen los poderes centrales decisorios de las políticas y de los presupuestos. La toma más reciente se mantiene en las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, en plena “zona rosa” de Bogotá, desde el 14 de diciembre de 1999. Es un proceso que se construyó en la toma misma, pues si bien un grupo de líderes la inició, fue la noticia del hecho la que impulsó la decisión de muchas familias de desplazados para unirse a esta toma, que completa ya ocho meses sin respuesta.

Si bien en muchos casos, el objetivo de las organizaciones de desplazados se centra en la cuestión material, se han ido planteando propuestas que buscan además, nuevas relaciones sociales y posiciones frente a los actores armados. Podemos señalar, por ejemplo, la exigencia del retorno, deseada por todos los desplazados, pero exigida solamente por algunas comunidades con una fuerte organización²⁹. Así mismo, las experiencias de las “Comunidades de Paz”, que han declarado públicamente neutrales frente a los

25 Así algunas poblaciones como El Castillo, Meta, en las áreas de frontera de la zona de despeje con las FARC, quedan “inmovilizadas”, en medio del cerco paramilitar y de la guerrilla. Más recientemente, los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada están denunciando como cerca de 4000 de ellos están cercados por los grupos armados.

26 Este es el término usualmente empleado, diferente al “estar desplazado” que implica una situación pasajera.

27 En el municipio de Tierralta, por ejemplo fue evidente el afán de los desplazados para ingresar a cualquier lista que se estuviera haciendo, sin siquiera preguntar o comprender exactamente cuál era su objetivo.

28 Parte del esfuerzo de la Red de Solidaridad, institución que está asumiendo actualmente la atención de la población en desplazamiento, tiene que ver con el proceso de identificación y verificación.

29 Son por ejemplo, los casos de Pavarandó (4500 personas), Turbo (3700 personas), Quibdó (126 familias), San José de Apartadó (300 personas), Barrancabermeja y San Pablo (10.000 personas), Buga (57 familias) Ver Grupo de Apoyo a Desplazados, 1998.

actores armados³⁰. De la misma manera existen otras organizaciones de desplazados que buscan su sobrevivencia, que inclusive se han formado con desplazados víctimas tanto de la guerrilla como de los paramilitares y que de manera más anónima, están recreando su vida comunitaria y ampliando su capacidad propositiva a partir de sus propias posibilidades. Estas experiencias reflejan capacidad de manejo de una crisis, en donde la identidad de "ser desplazado", vista como un estigma, se revaloriza para convertirse en un recurso para construir procesos de acción colectiva.

Dos características generales podemos señalar de estos procesos. Por una parte, mucha de la energía colectiva se va en gestionar los trámites formales, es decir en conseguir la personería jurídica, lo cual es muy importante para poder ser reconocida por las entidades del Estado, en detrimento del fortalecimiento del proceso organizativo mismo. Por otra parte, son organizaciones que trabajan de manera aislada para sus propios asociados. Sólo en Febrero de este año se dio comienzo a un proceso de articulación entre organizaciones, denominada la Coordinación Nacional de Desplazados “en la perspectiva de construir un movimiento nacional de desplazados”, la cual sin embargo no recoge buena parte de las asociaciones existentes.

2.2. El repoblamiento rural en zonas de cultivos de uso ilícito³¹

En medio de la crisis del sector agropecuario y más recientemente de la crisis generalizada del país, los cultivos de uso ilícito se configuran como una posibilidad de empleo y de ingresos para muchas personas y familias rurales y urbanas. Si bien la región más identificada con estos cultivos corresponde con los departamentos de Caquetá y de Putumayo en el sur del país, estos espacios productivos ocupan también otras regiones del país. Este flujo de trabajadores y comerciantes, hombres y mujeres de diferentes edades, pero particularmente jóvenes, hacia espacios geográficos, productivos y sociales típicamente rurales está produciendo un reordenamiento demográfico, caracterizado por una acelerada ruralización demográfica, acompañada de una fuerte urbanización sociológica³².

A partir de las cifras arrojadas por los censos, que bien pueden tener un subregistro especialmente de la población flotante, encontramos fuertes evidencias que permiten reforzar la información proveniente de la observación y de las entrevistas. Así lo muestra la comparación entre las cifras del censo de población de 1993 que supero por dos y tres veces los cálculos proyectados a 1995.

POBLACION CENSADA Y PROYECCIONES POBLACIONALES PARA CUATRO MUNICIPIOS DEL CAQUETA

POBLACION MUNICIPAL	POBLACION CENSADA EN 1993	POBLACION PROYECTADA A 1995	% DIFERENCIA
Milán	14454	5815	248.56
Valparaíso	20859	4756	438.58
Curillo	10444	15936	65.53
San José del Fragua	11370	7243	156.97

30 Una de las primeras experiencias fue la de la comunidad de La India, en Santander, ganadora del Premio Alternativo de la Paz. Ver, Sanz de Santamaría, 1991

31 Se recogen aquí reflexiones fruto de un trabajo de investigación colectiva sobre los cambios socioculturales de jóvenes de zonas con cultivos ilícitos, en el cual participé. Ver Ferro, Osorio, Uribe y Castillo, 1999.

32 El concepto de urbanización sociológica lo tomo de Jaime Eduardo Jaramillo (1986), quien lo desarrolla en torno a la influencia cultural en términos de vestimenta, costumbres, etc., que produce la ciudad en los habitantes del campo

Fuente: Datos del censo 93 y de proyecciones calculadas en 1992 por el DANE

Los datos muestran además del rápido crecimiento poblacional, que supera el crecimiento vegetativo y que solo puede explicarse por la dinámica migratoria. Cabe resaltar que de los 15 municipios caqueteños registrados en 1992, ocho habían sido creados a partir de 1985, época a partir de la cual se registra un crecimiento demográfico importante que se corresponde con el auge del cultivo de coca y la apertura de la comunicación carretable. Veamos esta dinámica en tres de estos municipios comparando los datos del censo de 1985 y el de 1993.

POBLACION DE CABECERA Y RESTO EN TRES MUNICIPIOS DEL CAQUETA 1985-1993

Municipios	1985	1993	1985	1993
	Cabecera	Cabecera	Resto	Resto
Milán	730	1194	4299	13260
Albania	1125	2656	8251	7018
Valparaíso	1838	2546	2980	18313

Fuente: Datos censales del DANE, 1985 y 1993.

Si bien las cabeceras municipales registraron crecimientos muy importantes, que llegaron a duplicar su población en ocho años, el crecimiento desmesurado de la zona rural identificada como “resto” llegó a triplicarse para Milán y a sextuplicarse en Valparaíso. Se evidencia así una contratendencia de los flujos nacionales orientados hacia las ciudades que ha estado generando un marcado repoblamiento rural en estas zonas del país, el cual, sin embargo, se caracteriza por tener un importante grado de movilidad e inestabilidad, según las orientaciones y restricciones de la producción y comercialización del producto³³.

- ☐ La composición de la población en las zonas de coca es muy diversa. Para el caso del Caquetá encontramos:
- ☐ Las comunidades indígenas asentadas allí desde tiempos ancestrales.
- ☐ Las familias de colonos, ya establecidos desde hace algunas décadas, provenientes del interior del país, fruto de “desplazamientos forzados” de la violencia de mediados del siglo.
- ☐ Los raspachines, hombres y mujeres, que son usualmente población joven dedicada a la recolección de la hoja de coca, muchos de ellos con una itinerancia permanente por la región, similar a la de los recolectores agrícolas.

Los comerciantes de productos de consumo que han encontrado un mercado importante por el flujo permanente de dinero.

Muchos de ellos mantienen una permanente movilidad por los mercados locales.

Los compradores de base de coca, que hacen su rotación permanente por los mercados de la región y con ellos sus guardaespaldas.

Las trabajadoras sexuales que mantienen también la itinerancia de los mercados locales.

La guerrilla de las FARC que llegó a la zona con la colonización, mucho antes de la coca.

Los grupos de paramilitares, en este momento buscando “liberar el territorio” de la influencia de las FARC.

Los grupos sociales son muy heterogéneos y los referentes identitarios bastante diversos. Quizá el común denominador de todos ellos sea el vivir directa o indirectamente de un producto agroindustrial declarado ilegal, como la coca. En medio de esta diversidad se van tejiendo lazos de solidaridad entre extraños, como es el caso de los “raspachines” que se van encontrando y conociendo hasta formar una especie de “cuadrillas” de trabajo y amistad con cierta estabilidad, las cuales sirven además para obtener una mayor capacidad de negociación con los patrones. El espacio del plante, es decir el cultivo de coca, se constituye en

³³ Los procesos son distintos para la coca y la amapola, dado que los primeros son cultivos semipermanentes en tanto que los segundos son cultivos semestrales. Aquí estaremos refiriéndonos principalmente al caso de la coca.

un espacio de socialización especialmente para los jóvenes raspachines. Allí se convive de manera permanente por varios días, se comparten espacios de trabajo, descanso y comida, y se construyen posibilidades de recreación, de normas, valores y hasta de una jerga particular (Ferro, Osorio, Uribe y Castillo, 1999)

La acción colectiva más importante tuvo que ver con las marchas cocaleras sucedidas en 1996, que se suscitó en diferentes lugares de la región de la Amazonía y la Orinoquía. 10.000 cocaleros del Guaviare marcharon hacia San José del Guaviare y Miraflores, y en una semana ya se calculaban 17.000 personas protestando por las fumigaciones. Simultáneamente, campesinos de Caquetá y Putumayo marchaban hacia Florencia y Mocoa, respectivas ciudades capital. Las protestas iban dirigidas a manifestar el desacuerdo con los resultados del programa de sustitución de cultivos, a exigir cumplimiento para acuerdos anteriores, y a demandar inversión estatal en infraestructura de servicios (Ramírez, 1998).

La convergencia de diferentes actores en esta manifestación de grandes proporciones permitió, entre otras, cosas la visibilidad de los raspachines como actores sociales. “Las marchas como un espacio de presión al estado generó unas relaciones obligadas de mínima organización coyuntural, representatividad, liderazgos y coordinación, tanto entre los jóvenes mismos como entre éstos y los demás grupos sociales frente a un objetivo común” (Ferro, Osorio, Uribe y Castillo, 1999, Pag 166). Igualmente, planteó de manera abierta a la sociedad colombiana y al Estado la presencia de un grupo numeroso de pobladores que dependían de esta actividad declarada ilegal, pero que en la región adquiere una connotación de legitimidad. Para los cultivadores y trabajadores de la coca la necesidad legítima esta actividad sancionada como ilícita. Ellos hacen la diferenciación entre cultivadores que trabajan por lucro (es decir los grandes productores) y los que lo hacen por necesidad (pequeños cultivos), diferenciación que quedó por escrito en los acuerdos establecidos entre el gobierno y los campesinos e indígenas marchistas en el Caquetá (Op.Cit.).

El manejo político y militar que se le dio a las marchas por parte del gobierno, confrontó a funcionarios nacionales y regionales en la valoración de la problemática y en el manejo represivo de la situación. Sin embargo, al darse la movilización en un territorio con un alto control de las FARC, se facilitó su deslegitimación, hecho que se suma a los estereotipos y representaciones que se tienen de estos territorios marginales (Ramírez, 1998). La relación entre Estado nacional y región, adquiere una importancia vital, así como la discusión sobre la construcción e identidad de región que se puede o no estar fraguando, a partir de un proceso tan dinámico de repoblamiento rural. El fenómeno vuelve a recuperar vigencia en este momento en que se identifica una nueva etapa en el conflicto armado en Colombia, marcada por la intervención explícita en el ámbito económico, militar y político por parte de los Estados Unidos, orientada hacia una erradicación agresiva de cultivos a través de la fumigación, estrategia que no ha mostrado efectividad y, en cambio, ha sido responsable de un impacto socio-ambiental negativo.³⁴

3. Nuevas o viejas ruralidades?

Las dinámicas migratorias producidas por el desplazamiento forzado y por los cultivos de uso ilícito, fenómenos ambos de gran vigencia en Colombia en este cambio de siglo, nos permiten hacer algunas reflexiones de tipo comparativo:

En primer lugar, es evidente que los dos procesos están mostrando flujos en vías contrarias. Mientras el desplazamiento está reforzando la migración rural urbana, los cultivos de uso ilícito están reorientando la migración interna hacia territorios “marginales” del país y hacia actividades eminentemente agropecuarias. Sin embargo, ambos procesos se caracterizan por tener un ritmo rápido en el tiempo y por la posibilidad de conectar a través de los migrantes territorios muy lejanos y disímiles. En ambas dinámicas existe una alta inestabilidad e incertidumbre por parte de los migrantes, quienes viven un tiempo más o menos largo de delocalización acompañados por movimientos de itinerancia, que hace lentos los procesos de reestructuración de redes sociales.

La sociedad de partida de cocaleros y desplazados bien pueden tener características comunes, sin embargo la decisión de partir tiene valoraciones distintas. Los cultivos de uso ilícito se constituyen en una puerta de escape para el desempleo rural y urbano acumulado en el país, con el agravante de ubicarlos en una actividad considerada ilícita, y sobre la cual el Estado entra a actuar de manera represiva en una zona donde tiene un bajo control. El desplazamiento, por su parte, al ser una estrategia de guerra para homogeneizar la población rural al lado de alguno de los actores armados, deja un contexto rural marcado por las huellas de la violencia y por la imposición de nuevas formas de poder armado en donde las posibilidades de participación democrática, difícilmente pueden darse.

Dos procesos de colonización de nuevos territorios se suceden por estas dos vías. El desplazamiento conduce a la colonización de espacios urbanos por parte de migrantes rurales, quienes van aportando sus referentes de ruralidad sociológica a la ciudad. Por su parte, los cultivos de uso ilícito orientan a una colonización de espacios rurales, a los cuales se llega con experiencias de vida urbanas, que posibilitan una urbanización sociológica de estos territorios. En ambos casos se sucede una articulación rural – urbana desde poblaciones empobrecidas, relación que está muy marcada por la influencia modernizante de la racionalidad productiva, el papel de los mercados y la influencia de los medios de comunicación. Ello no impide, que dados las dificultades y situación azarosa de quienes migran se desarrollen espacios de solidaridad, trueque y otras formas de convivencia, que se corresponde muy bien con la afirmación que “el nomadismo implica formas de solidaridad muy concretas” en donde “la socialidad va a reposar en un interaccionismo simbólico informal y a la vez muy sólido” (Maffesoli, 2000).

Ser desplazado y ser cocalero, si bien constituyen categorías temporales de identidad, se han ido asumiendo como referentes

34 El problema ambiental constituye un factor importante en las discusiones, que sin embargo ha sido suficientemente debatido. El uso del hongo *Fusarium oxysporum erythroxyli* en las fumigaciones constituye un enorme riesgo a la biodiversidad. Ver Amata y otros en “Golpe bajo a la biodiversidad?” en: Periódico de la Universidad Nacional, N° 13, agosto 13 de 2000.

identitarios más profundos. Ambas categorías tienen una connotación de fuerte estigmatización y marginalidad. Pese a ello, es desde esa condición que se han suscitado acciones colectivas para hacer reclamaciones, denuncias y a confrontar no solo al Estado, sino a la sociedad en su conjunto, sobre su problemática. Pareciera que las situaciones límites producen una resignificación de tales estigmas, que se convierten en punto de convergencia para articular experiencias e identidades diversas, y para demandar como grupo a la sociedad urbana una mayor atención a problemas que están tocando de manera directa territorios y sociedades rurales. El resultado no ha sido siempre el mejor, pues en muchos casos ha intensificado el señalamiento por realizar acciones de presión, reafirmando los imaginarios sobre el vandalismo, la delincuencia potencial que tienen desplazados³⁵ y cocaleros y, sobre todo, deslegitimando sus demandas al ubicarlos como aliados de las guerrillas³⁶.

Desplazados y cocaleros establecen relaciones distintas con el entorno social a donde llegan. Los desplazados que llegan a los centros urbanos entran a competir por los recursos escasos de los pobladores, quienes se sienten invadidos por “otros” que, además, atentan contra la seguridad de su territorio. Su presencia es mirada más en términos de peligro que de oportunidad. Los trabajadores cocaleros, por su parte, son mirados con cierta desconfianza por los colonos, residentes anteriores de la región. A quienes “llegan” se les asigna la responsabilidad por la violencia, el alcoholismo, la prostitución y todos los malos hábitos. Sin embargo, los raspachines entran a un espacio que demanda mano de obra, en donde los recursos no son escasos, a una sociedad regional en donde todos, de manera directa o indirecta se benefician de la coca. Los procesos de construcción de región o de localidad en medio de estos conflictos y posibilidades, están por verse.

Las acciones colectivas de desplazados y de cocaleros están orientadas a viejas demandas por el derecho a la vida, a la tierra, al trabajo y a un mínimo de servicios estatales. Desde estas nuevas identidades que aparecen en el contexto nacional dentro de los grupos empobrecidos, se actualizan demandas que parecen un eco de las que hicieron otros campesinos hace medio siglo. En medio de la guerra y del peligro que representa, se redefinen como sujetos de derechos para protestar y demandar, al tiempo que desde la cotidianidad, van resolviendo por sus precarios medios la sobrevivencia. En ese sentido, son pocas las acciones de resistencia que se han sostenido por un tiempo largo, en buena medida porque la modalidad de acuerdos y concertaciones que maneja el gobierno lleva a su desmonte, aunque con facilidad tales promesas se incumplan.

Desplazados y cocaleros son dos grupos sociales heterogéneos, que surgen y retroalimentan conflictos estratégicos para el país en su conjunto. Son la evidencia de que las brechas entre el campo y la ciudad, siguen vigentes, no sólo por la inequidad en la distribución de los beneficios, sino por los tenues nexos de solidaridad que se han establecido entre las sociedades que habitan estos espacios. La discusión sobre el carácter nuevo o tradicional de estas dinámicas quizá nos remita históricamente a la identificación de ciclos recurrentes, presentes inclusive en los mismos lugares en donde suceden ahora. Son viejas dinámicas en nuevos contextos históricos, sociales y culturales, con ritmos y actores diferentes.

Territorios, identidades y acciones colectivas se transforman con las migraciones internas y, a su vez, se recomponen en los espacios locales y regionales de salida y llegada. Intervenir en estos procesos implica, sin embargo, ir más allá de acciones paleativas y localizadas. Pensados como problemas sociales, el desplazamiento y el repoblamiento por cultivos de uso ilícito, exigen soluciones que pasan necesariamente por transformaciones estructurales que recompongan la sociedad colombiana en su conjunto, en donde lo rural sea suficientemente valorado en la vida nacional y en donde sea reconocida la mutua influencia entre lo rural y lo urbano, tanto para la producción de los problemas como para la construcción de sus soluciones.

BIBLIOGRAFIA

- BALCAZAR, Alvaro y Martha Lucia OROZCO. 1998. Agenda de Dinamización Productiva. En : Misión Rural, Transición, Convivencia y Sostenibilidad. Versión Preliminar. Santafé de Bogotá.
- CERNEA, Michael. 1997. El modelo de riegos y reconstrucción para el reasentamiento de poblaciones desplazadas. World development, Volumen 25, Número 10.
- ENTRENA DURAN, Francisco. Cambios en la concepción y en la organización del espacio rural. En: Estudios Rurales Latinoamericanos. Enero-Abril de 1993. Vol 16, No.1.
- FAJARDO, Darío y Hector MONDRAGON. 1997. Colonización y Estrategias de Desarrollo. IICA. Santafé de Bogotá, Colombia.
- FERRO, Juan G, Flor Edilma OSORIO, Graciela URIBE y Olga L. CASTILLO. 1999. Jóvenes, coca y amapola. Un estudio de las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Santafé de Bogotá, Colombia.
- FLOREZ, Carmen Elisa. 2000. Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX. Banco de la República

35 En la toma que hizo un grupo de desplazados del Comité Internacional de la Cruz Roja de mantiene el señalamiento que muchos de ellos son guerrilleros, e inclusive que tienen armas escondidas en el sótano (Entrevistas a desplazados y funcionarios)

36 Esta diferenciación por parte del Ejército y de la prensa se ha hecho evidente en varios casos. El más reciente, a mediados de Mayo se dio una toma de carreteras en el Magdalena Medio, como protesta para impedir que se abriera en el sur de Bolívar un espacio de diálogo con el ELN. Es sabido que detrás de esta acción colectiva estaba la presión de las autodefensas, pero si bien se señalaban las pérdidas causadas por este movimiento, la prensa en general no deslegitimó estas acciones. Una de las pocas denuncias la hizo Alfredo MOLANO, en su columna de El Espectador de Mayo 7 de 2000.

- y Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, Colombia.
- GÓMEZ, Alcides y Martha DUQUE. 1998. Tras el velo de la pobreza. La progreso rural en Colombia y los desafíos para el nuevo milenio. Misión Rural, Volumen 3. FINAGRO, IICA, Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, Colombia.
- GONZALEZ, Fernán. 2000. Una nación fragmentada: una aproximación a la violencia colombiana. En: Superación de la Impunidad. Reparación, Reconstrucción y Reconciliación. Memorias de Seminario-Taller. Diakonia. Santafé de Bogotá, Colombia.
- GRUPO DE APOYO A DESPLAZADOS. 1998. Informe sobre el desplazamiento interno forzado en Colombia en 1998. Documento policopiado. Santafé de Bogotá, Colombia.
- HAUT COMMISARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. HCR.1997. Les réfugiés dans le monde. Les personnes déplacées: l'urgence humanitaire. La Découverte. Paris.
- JARAMILLO, Jaime Eduardo. 1988.Estado, sociedad y campesinos. Tercer Mundo Editores, Bogotá, Colombia.
- KALMANOVITZ, Salomón.1995. Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía colombiana, en Drogas, Poder y Región. CINEP: Santafé de Bogotá, Colombia.
- KAYSER, Bernard. 1990.La renaissance rural. Armand Colin. Paris, Francia
- LLAMBI, Luis. 1994. Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: Revista ALASRU No. 2.
- MACHADO, Absalón. 1998. La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio. El Ancora Editores. Santafé de Bogotá. Colombia.
- MAFFESOLI, Michel. 1999. El nomadismo fundador. En: Revista Nómadas, N° 10. Abril. Traducción de Gisela Daza. Universidad Central. Santafé de Bogotá, Colombia.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, IICA. 1995.Censo de Minifundio en Colombia. Febrero. Santafé de Bogotá, Colombia.
- MONDRAGON, Héctor. 2000. Lo que Colombia necesita. Estudio que fundamenta y formula una estrategia alternativa al Plan Colombia. Documento. Santafé de Bogotá, Colombia.
- MORIN, Edgar. 1995. Sociología. Editorial Tecnos. Madrid, España.
- ORTIZ, Carlos Miguel. 1985. Estado y Subversión en Colombia. La violencia en el Quindío en los años 50. CEREC y CIDER. Bogotá, Colombia.
- OSORIO, Flor Edilma y Fabio LOZANO. 1996.Población rural desplazada por violencia en Colombia. En: Cuadernos de Desarrollo Rural. N° 36, primer semestre. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Rurales. Santafé de Bogotá, Colombia.
- OSORIO, Flor Edilma y Fabio LOZANO. 1999. Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia, 1995-1997. En: Un país que huye. CODHES, UNICEF. Santafé de Bogotá, Colombia.
- OSSA, Carlos. 2000. Problema Social Rural. En: El espectador, Julio 2. Santafé de Bogotá, Colombia.
- PASTRANA, Andrés. 1999. Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado. Santafé de Bogotá, Octubre.
- PÉCAUT, Daniel. 1987. Orden y Violencia: Colombia 1930-1953. CEREC, Siglo XXI Editores. Bogotá, Colombia.
- PICOUET, Michel. 1995. Los conceptos de reversibilidad y de residencia-base en el estudio de la migración. En: Las nuevas formas de movilidad de las poblaciones urbanas en América Latina. Edición científica: Françoise Dureau. Universidad de los Andes; Documento CEDE 097. Santafé de Bogotá, Colombia.
- RAMIREZ, María Clemencia. 1998. Las marchas de los cocaleros en el Amazonas. Reflexiones teóricas sobre la marginalidad, construcción de identidades y movimientos sociales. En: Modernidad, Identidad y Desarrollo, María Lucía Sotomayor, Editora. Instituto Colombiano de Antropología, COLCIENCIAS. Santafé de Bogotá, Colombia.
- RESTREPO R., William. 1999. Conflicto armado, terrorismo y violencia en Colombia. En: Guerra, violencia y terrorismo. Alejo Vargas, Compilador. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, Colombia.
- STEINER, Roberto. 1996. Los Ingresos de Colombia producto de la exportación de drogas ilícitas. En: Coyuntura Económica, Diciembre. Santafé de Bogotá, Colombia.
- VALDERRAMA, Mario y Hector MONDRAGON. 1998. Misión Rural. Transición, Convivencia y Sostenibilidad. Desarrollo y equidad con Campesinos. Documento. Sanafé de Bogotá, Colombia.
- VARGAS, Alejo. 1999. Colombia al final del siglo: entre la guerra y la paz. En: Guerra, violencia y terrorismo. Alejo Vargas, Compilador. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, Colombia.

